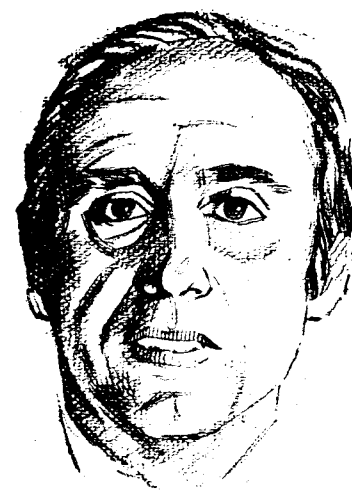


José Antonio Segurado: «El Gobierno ha matado abejas a cañonazos»



Segurado: «El Gobierno nos ha metido en una aventura con riesgo infinito»



José María Ruiz Mateos

—Yo reconozco la buena voluntad. Pero es posible que con la buena fe se actúe inconstitucionalmente. Aunque se lleve ahora al Tribunal Constitucional el perjuicio ya está hecho. Yo anuncio ya el comienzo de una batalla legal.

—Pero hay una pregunta elemental: ¿existe la quiebra de Rumasa?

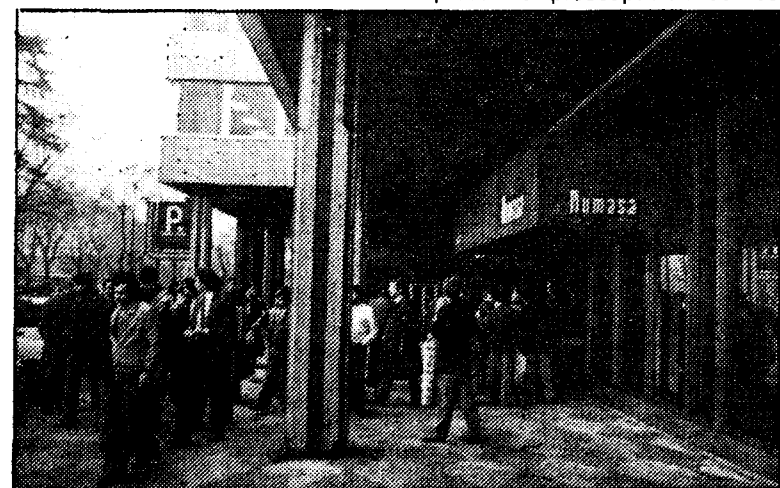
—No la conozco. Mientras no se conozcan las cifras es inútil hablar. En setenta y dos horas es inaudito que se pidan las auditorías y no se espere a los resultados de las mismas. No entiendo que se haya podido responder a una provocación, suponiendo que hubiera habido provocación.

—Es decir, que el Gobierno no conoce, o no conocía en el momento de la expropiación, el verdadero estado de emporio de la abeja. ¿Lo conoce alguien en este país?

—Los antiguos responsables de Rumasa. Mientras no se dé una fotocopia del balance no habrá información suficiente. Es por eso que no me explico el que si no estaban firmadas las auditorías, si no se ha escuchado a los responsables de Rumasa y si no hay una valoración exacta del coste, ¿cómo en veinticuatro horas se toma esa decisión? No tengo por qué dudar de las cifras dadas por Boyer, pero todavía no se han pronunciado los Tribunales sobre la deuda tributaria recurrida.

Miedo empresarial

José Antonio Segurado vuelve a expresar la preocupación de los



Consternación entre los empleados de Rumasa

empresarios normales cuyas empresas marchan bien: «De repente tienen una sensación de intranquilidad y de miedo a que cualquier tipo de incidente signifique una expropiación. A pesar de que Boyer haya dicho que no.»

—¿Cómo puede ahora desaparecer esta inquietud?

—Con una actuación rápida del Gobierno que devuelva eficazmente el control de las empresas al sector privado. Eso puede disipar las dudas. Si no, muchos empresarios van a pensar que el Gobierno pone el pie en el sector privado para la nacionalización. Yo he mantenido, como ya he dicho, una entrevista con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y me aseguró que no hay ningún deseo de nacionalizar. Pero no vale una declaración de principios, sino el que se adopten medidas. De lo contrario el país va a vivir momentos difíciles desde el punto de vista de la credibilidad.

Matar abejas a cañonazos

—¿Cree usted que los grandes Bancos han apoyado en esta decisión al Gobierno?

—¡Vaya pregunta! —exclama mientras se reacomoda en el sillón— No lo sé. Lo que sí sé es que ningún dirigente empresarial ha sido consultado o informado.

Después de una breve pausa vuelve a incorporarse en su asiento y esboza una pequeña sonrisa que desaparece casi inmediatamente: «Nadie discute que en una situación tan grave como ésta no haya que tomar una decisión. Pero no estamos en situación de matar abejas a cañonazos. Vamos a tardar muchos meses, incluso años, en ver las consecuencias de esta decisión aventurada.»

Ahora, la misma rapidez, al revés

—¿Califica usted, tal y como se ha apuntado, esta decisión como un grave precedente?

—No es que sea exactamente un grave precedente, pero como el Gobierno no empieza a devolver empresas al sector privado y a profundizar en la información... dudo que el problema se resuelva. Me parece que si el problema es grave con más razón es insostenible el que un Gobierno no fuerce a que la otra parte ceda. Pero el que se dé este escándalo... Sólo una actuación igual de rápida del Gobierno podría dar tranquilidad.

—¿Y si el Gobierno no da esa respuesta?

—Inquietud empresarial inmensa con todas sus consecuencias.

—¿Con actuaciones concretas?

—No. De momento bastante tiene el empresario en preocuparse por sus empresas.

—Usted ha dicho que no puede creer que el Gobierno haya respondido a una especie de «desafío». ¿Piensa que ha podido tener interés en «dar una lección» a la empresa privada?

—¿Escarmentar a la iniciativa privada? A mí me gustaría creer que no. Si el Gobierno hubiera tenido esa intención sería una traición absoluta a su programa.

Luisa PALMA

- «El trato a Rumasa por parte del Gobierno me parece desconsiderado y humillante.»
- «Las reglas de una economía libre de mercado se han conculcado.»
- «Cuando se inicia un camino de severidad hay que tener un techo de cristal.»
- «Aunque el tema Rumasa se lleve al Tribunal Constitucional, el perjuicio ya está hecho.»
- «Sólo se puede disipar la intranquilidad si son devueltas rápidamente las empresas al sector privado.»

ción no se produjera. Yo, en un tema que no conozco lo suficiente y corriendo riesgos, que espero sean sólo los de equivocarse, yo no lo hubiese hecho: hubiera esperado. Devolviendo los argumentos empleados por el ministro de Hacienda: no sabe Boyer el número de empresas del «holding», el resultado de las auditorías, ni lo que nos va a costar. Nos ha metido en una aventura con riesgo infinito.

Se han transgredido las reglas

—Las razones del Gobierno, desde su punto de vista, ¿han sido de «utilidad social», para evitar un mal mayor?

—A mí, como ciudadano de a pie, me dicen que la decisión ha sido tomada por utilidad social y que los responsables de Rumasa han cometido errores, pero no me dicen lo que va a costar. Estamos en una economía libre de mercado y las reglas de juego se han conculcado. Muchos empresarios se preguntan si no se hubiera podido solucionar como la Banca Catalana, solución que no ha costado una sola peseta al contribuyente español. La situación económica es delicada y en las empresas más; si en estos momentos falta confianza... Yo espero y deseo que el Gobierno haya sopesado el tema. Es de destacar la fantástica severidad y rapidez de la decisión. ¿El Estado y sus empresas públicas se tratan tan severamente?

—En vez de «fantástica severi-

Una aventura con riesgo infinito

—Supongamos que la expropiación sea necesaria.

—¿Qué garantía hay de que esta fórmula vaya a solucionar el tema? ¿Por qué no se ha podido valorar el verdadero estado? La prudencia hubiera aconsejado que la expropiación

rece un trato desconsiderado y humillante.»

—Si usted no está de acuerdo con la forma en que ha actuado el Gobierno...

—¡Yo me quedé atónito! —interrumpe espontáneamente—. Esto no se puede hacer así. Es más, no se ha hecho así en ninguno de los casos delicadísimo con los que se han tenido que enfrentar este Gobierno u otros: Banca Catalana, Explosivos Río Tinto, etcétera.

—¿Qué es entonces lo que ha diferenciado a Rumasa de estos casos? ¿Cuál ha sido la característica diferencial?

—Lo único que yo conozco es la rueda de Prensa de Ruiz Mateos. Pero me cuesta pensar que un ministro de Economía y Hacienda, y posteriormente un Gobierno, caigan en la trampa de adoptar una decisión de este calibre sólo por esta

¡Pero no me cuadran las cuentas!», dice con una ancha sonrisa. Pero cambia pronto su expresión al recordar las palabras del ministro Boyer: «Yo creo que el tema es extraordinariamente grave, y jurídicamente es discutible a la luz del artículo ochenta y seis de la Constitución Española. Desde el punto de vista jurídico, un decreto-ley que se lleva a las Cortes se convierte en ley. Pero esto ha tomado un efecto y unas consecuencias extraordinariamente trascendentales. Hay un tema fundamental: la forma en que este asunto se ha llevado a cabo, una forma horrorosa. No hay precedentes ni en España ni en ningún país occidental europeo. Y me refiero también a que un ministro de Hacienda filtre una preocupación de la salud financiera de un grupo de empresas. Luego, la rueda de Prensa de Ruiz Mateos..., a mí, personalmente, no me pareció afortunada...»

—¿Cree que las afirmaciones de Ruiz Mateos, que el propio Gobierno calificó como «desafío», han podido influir en la decisión del Ejecutivo?

—A eso voy. Asumiendo, como decía, que a mi manera de ver no ha sido afortunada, supongamos que hubiera sido agresiva o provocadora... ¡el Gobierno con todo su poder no se puede dejar influir ni utilizar esto como excusa!

Trato desconsiderado y humillante

Segurado insiste en una crítica dura a la forma en que el Gobierno adoptó la decisión: «Me resulta incomprensible, absolutamente incomprensible, y así se lo he dicho recientemente al vicepresidente del Gobierno, el que cuando llegaron a la conclusión del decreto de expropiación, alguien del Gobierno no tomase un teléfono y dijese: «Señor Ruiz Mateos, prácticamente hemos decidido expropiar; ¿estaría usted dispuesto a aceptar las condiciones de la A a la Z para no expropiar?». El que se decida ese decreto y se anuncie como se anunció... y se den órdenes que impidan que los altos directivos de Rumasa puedan sacar papeles personales, y digo personales, de las oficinas me pa-



Miguel Boyer